

Gana la sociedad; con matices

VICTORIA ORTEGA

Quien gana, con algunos matices, tras la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar definitivamente las tasas que impuso Ruiz-Gallardón, son los ciudadanos, en este caso los pequeños y medianos empresarios, y la Justicia. El «matiz» es que durante casi cuatro años, los ciudadanos han sufrido una norma injusta, se ha limitado el acceso a la Justicia, se ha violado la tutela judicial efectiva y la Justicia se ha resentido. Todos sabíamos que las tasas a ciudadanos y pymes eran injustas y desproporcionadas. Casi todos. Aunque el mismo Gobierno que las impuso modificó dos veces la ley, las tasas se han mantenido hasta que el Alto Tribunal ha determinado su nulidad. Y duran-

te todo ese tiempo, muchos ciudadanos no han podido acceder a la Justicia. Un tiempo durante el cual ha crecido la inseguridad jurídica, la agonía de miles de ciudadanos que no han podido iniciar trámites ante los tribunales para defender sus derechos y otros, que sí lo han hecho, han tenido que pagar un coste añadido, unas tasas injustas, desproporcionadas e inconstitucionales. Y todo ello sin que ni un solo euro de ese dinero –cuya cuantía todavía desconocemos–, contra lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia gratuita. Y que, pese a la sentencia, tampoco revertirá ahora en esa mejora.

Hay que recordar que en febrero de 2012, cuando el ministro Ruiz-Gallardón anunció que no habría tasas en primera instancia y sí en segunda, de forma simbólica, para disuadir a los que abusaban de la Justicia –el TC dice también que la norma no servía para este objetivo–, nadie se manifestó en contra, a la espera de ver cómo se concretaba la propuesta. Pero desde el mismo momento en que el ministro incumplió totalmente su palabra, la Abogacía institucional no dejó de denunciar esa situación y de trabajar para revertirla. Lo saben bien en el Ministerio

de Justicia, en la Presidencia del Gobierno, en el Defensor del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, en los partidos, en los sindicatos y en la calle, donde nos hemos manifestado en repetidas ocasiones.

La batalla de la Abogacía institucional –respaldada solidariamente por los sindicatos y las asociaciones de consumidores, integrados en la Plataforma Justicia para Todos, pero también por asociaciones de jueces y fiscales, por otros colectivos jurídicos, por los partidos políticos, incluido a última hora el Partido Popular, y por muchos ciudadanos de a pie– ha conseguido un éxito indudable, aunque la satisfacción sea parcial porque la batalla ha durado demasiado tiempo, el daño a los ciudadanos se podría haber evitado y el

dinero no se ha utilizado para mejorar la Justicia. Nuestro agradecimiento al ex presidente de la Abogacía Carlos Carnicer por haber iniciado la protesta cuando muchos pensaban que era una batalla perdida, y al ministro de Justicia en funciones, Rafael

Catalá, porque una de sus primeras medidas fue derogar las tasas para los ciudadanos. El Gobierno debería haber ido más allá y hoy no tendríamos que estar hablando de esta victoria social que tiene, como he dicho, un regusto amargo.

¿Una lección de esta batalla? La más clara es que si hubiera habido diálogo y negociación antes de imponer esta ley no se habría causado un daño irreparable a la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Hay muchos temas pendientes para conse-

guir una Justicia que merezca ese nombre. Pero sólo se podrá alcanzar y mantener desde el debate, el acuerdo y la cesión de todos. Cuando se imponen sin reflexión y sin diálogo se hacen las cosas mal. Si los que deben aprender eso, seguro que

en el futuro podremos evitar muchos errores como el de las tasas. Los dicho, ganan los ciudadanos y gana la Justicia.

Victoria Ortega es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Ni un solo euro de lo recaudado en las tasas se ha destinado a mejorar la Justicia